

**JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
PARTIDARIOS DEL MILITANTE**

EXPEDIENTE: CEJP-MI-JDP-003/2013.

PROMOVENTE: PAOLA BARRERA MAZÓN Y OTROS

**RESPONSABLE: COMISIÓN ESTATAL DE PROCESOS
INTERNOS DEL C.D.E. DEL P.R.I.,
ESTADO DE MÉXICO.**

Toluca de Lerdo, Estado de México, a treinta de diciembre del año dos mil trece.

VISTO el oficio de cuenta, por el que el Licenciado ALBERTO MORENO GARCÍA, en su calidad de Presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos, remite a esta instancia intrapartidaria el escrito de impugnación presentado en fecha veinticuatro de diciembre de los corrientes, por los CC. PAOLA BARRERA MAZÓN y OTROS, quienes dicen ser vecinos del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, por el que impugnan la Convocatoria para la elección de Consejeros Políticos Municipales del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, para el periodo estatutario 2013-2016; constancias de fijación y retiro del mencionado escrito, acuerdo de recepción del medio de impugnación e informe circunstanciado en cuarenta y cinco fojas útiles por un solo lado; y- - - - -

R E S U L T A N D O

I.- El Consejo Político Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el Municipio de Chimalhuacán, Estado de México, en fecha seis de noviembre de dos mil trece, aprobó la renovación del Consejo Político Municipal de nuestro Partido en ese municipio; el procedimiento estatutario de elección directa mediante el voto universal, secreto, personal, libre, directo e intransferible de los militantes del Partido, para elegir a los Consejeros Políticos Municipales de representación territorial; el Tope de Gastos de Campaña; las Zonas Geográficas Electorales, para la celebración de Asambleas Electorales Territoriales y la homologación del periodo estatutario con los demás municipios de la entidad. - - - - -

II.- Con fecha diez de diciembre de dos mil trece, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido, emitió Acuerdo por el que autoriza al Comité Directivo Estatal del Estado de México a expedir la Convocatoria para la elección de Consejeros Políticos Municipales del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, para el periodo estatutario 2013-2016. - - - - -

III.- Con fecha once de diciembre del año en curso, el Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el Municipio de Chimalhuacán, Estado de México, llevó a cabo la publicación de la Convocatoria para la elección de Consejeros Políticos Municipales del Partido Revolucionario Institucional en ese municipio, para el periodo estatutario 2013-2016. - - - - -

IV.- En fecha quince de diciembre de dos mil trece, en cumplimiento a lo señalado por la Base Trigésima Segunda, segundo párrafo, de la Convocatoria mencionada, la Comisión Estatal de

Justicia Partidaria llevó a cabo la certificación del término legal para la eventual presentación de medios de impugnación previsto por los artículos 15 y 16 del Reglamento de Medios de Impugnación de nuestro Partido, haciendo constar que dentro de dicho término legal, el cual inició a las once horas del día once de diciembre de dos mil trece y feneció a las once horas del día quince del mismo mes y año, no se recibió escrito alguno en contra de la publicación de la Convocatoria para la elección de Consejeros Políticos Municipales del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, para el periodo estatutario 2013-2016. -----

V.- En fecha dieciocho de diciembre de los corrientes, se emitió el acuerdo por el que se ejerce la facultad de atracción a la Comisión Estatal de Procesos Internos, el que permite a ese órgano intrapartidario superior, cumplir supletoriamente las tareas del órgano responsable de la conducción del proceso interno para la elección de Consejeros Políticos Municipales del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, para el periodo estatutario 2013-2016, al haberse actualizado los supuestos establecidos en el artículo 143, segundo párrafo de los Estatutos del Partido y 48 del Reglamento para la elección de Dirigentes y Postulación de Candidatos, al presentarse situaciones que podrían alterar el desarrollo normal del mencionado proceso interno, publicándose dicho acuerdo en los estrados de las Comisiones Estatal y Municipal de Procesos Internos, en la página oficial del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, así como los puntos PRIMERO y SEGUNDO del mencionado acuerdo y el calendario de actividades correspondiente en dos diarios de circulación estatal. - - - -

VI.- En fecha veinticuatro de diciembre del presente año, los promoventes presentaron ante la Comisión Estatal de Procesos Internos del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México, escrito de impugnación en contra de la Convocatoria para la elección de Consejeros Políticos Municipales del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, para el periodo estatutario 2013-2016. -----

VII.- En fecha veinticuatro del mes y año en curso, el C. GUILLERMO RENTERÍA GARCÍA, Secretario del Titular de la Secretaría del Movimiento Nacional de Vinculación Ciudadana de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, remitió escrito diverso a la autoridad responsable, Comisión Estatal de Procesos Internos, el cual es una copia fiel que se encuentra en los mismos términos que el escrito primigenio, promovido por los CC. PAOLA BARRERA MAZÓN y OTROS, quienes dicen ser vecinos del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, por el que impugnan la Convocatoria para la elección de Consejeros Políticos Municipales del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, para el periodo estatutario 2013-2016. -----

VIII.- En fecha veinticuatro de diciembre del presente, el órgano responsable pronunció acuerdo de recepción recaído al mencionado escrito inicial, llevando a cabo la fijación del escrito de impugnación en los estrados de ese órgano intrapartidario durante el término de cuarenta y ocho horas, para efectos de la eventual presentación de terceros interesados, retirando el escrito de los estrados en fecha veintiséis del mismo mes y año al término de dicho periodo, sin haberse presentado escrito de tercero interesado alguno. -----

Por lo anterior, se procede a emitir la resolución conducente, al tenor de los siguientes: - - - - -

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que la Comisión Estatal de Justicia Partidaria es el órgano del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México, encargado de llevar a cabo la justicia partidaria, garantizando los principios de unidad, legalidad, certeza, imparcialidad, equidad y transparencia así como el orden jurídico en los procesos internos para elegir dirigentes y postular candidatos, debiendo fundar y motivar sus resoluciones con base en lo previsto en los Estatutos, los reglamentos e instrumentos normativos partidistas, y aplicando supletoriamente las leyes de la materia respectiva, de conformidad a lo dispuesto en los Artículos 2 y 68 del Reglamento Interior de las Comisiones Nacional, Estatales y del Distrito Federal de Justicia Partidaria, así como los artículos 1, 2, 8 y 12 del Reglamento de Medios de Impugnación. - - - - -

SEGUNDO.- Que los actos señalados por los promoventes en el escrito de inconformidad que se provee, se tratan de actos emitidos por órganos o dirigentes del Partido con jurisdicción en el Estado de México, de conformidad con los Artículos 209, 210, 211, 214 fracciones I, V, X y XII y 215 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional; 1, 2, 3, 5 fracción IV y 8 del Reglamento de Medios de Impugnación, por lo que esta Comisión Estatal es competente para conocer de la presente controversia. - - - - -

TERCERO.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos antes invocados, así como del artículo 49 fracción IV del Reglamento de Medios de Impugnación, corresponde a esta Comisión Estatal de Justicia Partidaria, emitir un acuerdo en el que se determine, previa revisión de oficio, sobre la procedencia o improcedencia del escrito de impugnación. - - - - -

CUARTO.- Que antes de entrar al estudio de fondo, por economía procesal y toda vez que es esencial para emitir una resolución, resulta conveniente iniciar por revisar si se cumplen los requisitos de procedibilidad señalados en los ordenamientos aplicables, y si éstos se encuentran debidamente satisfechos, por lo que en el presente caso, una vez realizada la revisión oficiosa se encontró que, de conformidad con lo establecido en los artículos 16 párrafo segundo, 18 fracciones I, IV, V, VI, VIII, IX y X, 21 fracción I, 22, 23 fracciones I, II, III, IV y V y 49 fracción IV del Reglamento de Medios de Impugnación, **LOS IMPUGNANTES NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESENCIALES DE PROCEDIBILIDAD** establecidos en los numerales invocados, necesarios para la admisión y sustanciación de la presente Inconformidad, de conformidad con las siguientes consideraciones: - - - - -

Primeramente, los promoventes presentan su escrito sin exhibir documental alguna con la que se pueda determinar el carácter con el que promueven, ni puntualizarlo debidamente; no señalan domicilio en la ubicación territorial de esta Comisión en el que pueda localizárseles para oír y recibir notificaciones; no mencionan los artículos que estiman violen sus derechos partidarios; no señalan, ofrecen ni acompañan prueba alguna a su escrito inicial; asimismo, no presentan puntos petitorios claros, lo que deviene en la obscuridad de su escrito, a razón de que esta autoridad intrapartidaria carece de elementos para determinar siquiera a manera presuntiva, cuál es la

pretensión de los promoventes; y fundamentalmente presentan su escrito de manera extemporánea, impugnando un acto de la autoridad partidaria que se encuentra consentido de manera tácita por la militancia partidista, al haber presentado su escrito fuera de los plazos establecidos en el párrafo segundo del Artículo 16 del Reglamento de Medios de Impugnación, que a la letra dice: - - - - -

“Artículo 16.

...

*El Juicio para la Protección de los Derechos Partidarios del Militante **deberá interponerse dentro de los cuatro días hábiles contados a partir del día siguiente del que se hubiese notificado, publicado o conocido el acto o resolución impugnado**”.*

Requisito esencial que no se satisface y el cual es indispensable para dar trámite a su eventual solicitud; lo anterior incumple cabalmente con los requisitos formales de presentación de su escrito inicial, conforme a lo establecido por las fracciones I, II, IV, V, VIII, IX y X, del artículo 18 del Reglamento de Medios de Impugnación intrapartidaria. Se transcribe el mencionado artículo para su análisis y referencia:

“Artículo 18.- Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnado, y deberán cumplir con los requisitos siguientes:

- I. **Presentarse dentro de los plazos establecidos para la interposición de los medios de impugnación;**
- II. *Dirigirse al Presidente de la Comisión competente;*
- III. *Estar escritos en idioma español;*
- IV. **Hacer constar el nombre del actor y describir la personería o carácter con la que se comparece y acreditarla con los documentos respectivos;**
- V. **Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en la ubicación territorial de la Comisión correspondiente y, en su caso, autorizar a quien en su nombre las pueda oír y recibir; apercibido que de no hacerlo, todas, incluidas las personales, se realizarán válidamente por estrados;**
- VI. **Identificar el acto o resolución impugnada y la autoridad responsable del mismo;**
- VII. *Hacer la descripción cronológica de los hechos que se presuman sean causa de agravio;*
- VIII. **Mencionar los artículos que se estimen violados en su perjuicio;**
- IX. **Señalar las pruebas que ofrezca y/o acompañe al escrito que estén relacionadas con los hechos que reclama; y solicitar las que deban requerirse, cuando el promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano partidario correspondiente y no le hubieren sido entregadas. Cuando la violación reclamada verse exclusivamente sobre puntos de derecho no será necesario cumplir con este requisito;**
- X. **Contener los puntos petitorios que describan lo que se solicita de la Comisión ante la que se comparece;** y
- XI. *Hacer constar la firma autógrafa de quienes en ellos intervengan o, en su caso, contener su huella digital impresa.*

*El incumplimiento de los requisitos previstos en las fracciones I, VI y XI, dará lugar al **desechamiento de la instancia**.*

Visto lo anterior, es imperativo mencionar que el escrito que se presenta actualiza diversas causales de IMPROCEDENCIA, señaladas en el artículo 23 fracciones I, II, III, IV y V del mencionado Reglamento, toda vez que el incumplimiento de los requisitos de procedibilidad mencionados devienen en un consecuente **DESECHAMIENTO**, según lo estipulado en el artículo 49 del Reglamento en consulta. - - - - -

QUINTO.- Efectivamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 fracciones I, II, III y IV del Reglamento de Medios de impugnación, las causales de IMPROCEDENCIA que al efecto se actualizan, son las siguientes: - - - - -

*“**Artículo 23.-** Los medios de impugnación previstos en este ordenamiento serán improcedentes en los siguientes casos:*

- I. **Se pretenda impugnar actos o resoluciones que no afecten el interés jurídico del actor;***
- II. **Se presenten fuera de los plazos señalados en este Reglamento;***
- III. **Cuando el promovente carezca de legitimación en los términos del presente ordenamiento;***
- IV. **El acto o resolución se hayan consumado de un modo irreparable, o que se hubiesen consentido tácita o expresamente;***
- V. **No se hayan agotado las instancias previas en su caso;***
- VI. **Cuando en un mismo escrito se pretenda impugnar más de una elección; y***
- VII. **Cuando los agravios manifiestamente no tengan relación directa con el acto o resolución que se pretende combatir, o bien porque de los hechos que se expongan no pueda deducirse agravio alguno”.***

Esto es, por lo que hacen mención los promoventes en su escrito inicial, tuvieron conocimiento del acto que impugnan el día **once de diciembre del dos mil trece**, presentando su escrito ante la autoridad responsable trece días después de conocer el acto que desean controvertir, es decir, el día **veinticuatro de diciembre del presente año**, además de que esta autoridad intrapartidaria llevó a cabo la certificación de que no se presentó escrito alguno de impugnación en contra de la publicación de la Convocatoria que se controvierte, dentro del término estatutario para ese fin, existiendo fe notarial del mismo, lo que de conformidad con la fracción IV del artículo 49 del mismo ordenamiento reglamentario, procede emitirse **ACUERDO DE DESECHAMIENTO**, toda vez que la presente inconformidad resulta notoriamente improcedente, y en consecuencia deberá decretarse su desecharse sin entrar al estudio del fondo de la misma. - - - - -

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial XVI/2001 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: - -

CADUCIDAD. SUS PRINCIPIOS RIGEN PARA LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ELECTORALES.- Los principios doctrinales sobre la caducidad resultan aplicables al derecho conferido para pedir la revocación, modificación o nulificación de los actos de las autoridades

electorales, a través de los medios de impugnación que prevén las leyes de la materia, en razón de que ese derecho está regulado de tal manera que se satisfacen totalmente los elementos constitutivos de la figura jurídica en cuestión, por lo siguiente: a) El derecho de impugnación constituye una facultad, potestad o poder para combatir actos o resoluciones de las autoridades electorales, mediante la promoción o interposición de los juicios o recursos fijados por las leyes correspondientes, con el claro objeto de crear, modificar o extinguir las relaciones o situaciones jurídicas que se consignan o derivan de tales actos o resoluciones, que se encuentran referidas a cuestiones de orden público; **b) El contenido de los actos y resoluciones electorales se rige por el principio de certeza, por exigencia directa del artículo 41, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 73 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que sólo se puede respetar cabal y adecuadamente si los citados actos y resoluciones gozan de definitividad y firmeza, y esto se consigue con la interposición y resolución de los procesos impugnativos o con el transcurso del tiempo establecido para hacer tal impugnación;** c) Dicha certeza debe ser pronta, especialmente en los procesos electorales, porque las etapas de éstos no tienen retorno, en determinados momentos y circunstancias no cabe la reposición de ciertos actos y resoluciones, y la validez y seguridad de cada acto o resolución de la cadena que conforma estos procesos, puede dar pauta para elegir entre varias posibles acciones o actitudes que puedan asumir los protagonistas, sean las propias autoridades, los partidos políticos o los ciudadanos, en las actuaciones y fases posteriores, dado que éstas deben encontrar respaldo en las precedentes y estar en armonía con ellas; d) Los plazos previstos por la ley para el ejercicio del derecho en comento son breves, pues para la generalidad de los medios de impugnación, según se advierte en materia federal en el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es de cuatro días hábiles, fuera de los procesos electorales y naturales durante éstos, e inclusive se llegan a prever plazos menores, como el señalado para interponer el recurso de apelación en el artículo 43, apartado 1, inciso a), del mismo ordenamiento; e) Está regulada expresamente la extinción del derecho mencionado, si no se ejerce dentro del limitado plazo fijado por la ley, al incluir en el artículo 10, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dentro de los medios de impugnación que serán improcedentes, a aquellos contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en esa ley; f) Este medio de extinción del derecho opera por el mero transcurso del tiempo, dado que no se exige en la ley ningún otro requisito; g) El mismo no es susceptible de suspensión o interrupción, en virtud de que el ordenamiento legal que lo regula no contempla que, ante determinados hechos, actos o situaciones, el plazo legal quede paralizado para reanudarse con posterioridad, o que comience de nueva cuenta, ni se encuentran bases, elementos o principios que puedan llevar a dicha consecuencia en condiciones ordinarias; h) Esta forma de extinción no admite renuncia, anterior o posterior, porque está normada por disposiciones de orden público que no son renunciables, por su naturaleza, y no existen en la normatividad aplicable preceptos que establezcan alguna excepción para esta hipótesis; i) Como está incluida dentro de las causas de improcedencia, se debe invocar de oficio por los tribunales, independientemente de que se haga valer o no por los interesados.

Tercera Época

Recurso de apelación. [SUP-RAP-043/2001](#). Familia en Movimiento, Agrupación Política

Nacional. 25 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González.
Secretario: Jaime del Río Salcedo.

Notas: El contenido del artículo 41, párrafo segundo, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en esta tesis, corresponde con el 41, párrafo segundo, base V, de la Constitución vigente; asimismo, el artículo 73 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, corresponde con el 109, del ordenamiento vigente a la fecha de publicación de la presente Compilación.

La Sala Superior en sesión celebrada el catorce de noviembre de dos mil uno, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 38 y 39.

En el presente asunto, como ha quedado señalado, se incumplió con los requisitos de procedibilidad referidos en el presente considerando, por lo que se actualiza objetivamente la hipótesis jurídica establecida en la fracción IV del Artículo 49 del Reglamento de Medios de Impugnación antes mencionado, que a la letra dice: - - - - -

“Artículo 49.- Recibida la documentación a que se refiere el artículo 44 de este Reglamento, se estará a lo siguiente:

I.

...

*IV. Si de la revisión de oficio de la procedibilidad del medio de impugnación se advierte que se incumple alguno de los requisitos esenciales para sustanciar y resolver el asunto, que **resulta evidentemente frívolo o bien encuadra en una de las causales de improcedencia o sobreseimiento, el Presidente de la Comisión competente, asistido por el Secretario General de Acuerdos, emitirá el acuerdo correspondiente para su desechamiento;***

...

V. ...”

Por lo que en términos de la fracción IV del artículo 49 del ordenamiento reglamentario antes invocado, procede el **DESECHAMIENTO DE PLANO**, sin entrar al estudio de fondo en el presente asunto. - - - - -

SEXTO.- En cuanto al requisito de acreditar la personería exigido por la fracción IV del artículo 18 del Reglamento de Medios de Impugnación citado, se encuentra que es requisito indispensable de procedibilidad la acreditación de la personería con la que comparece el actor, esto es, que sea **promovido por militante del Partido Revolucionario Institucional**, considerando lo señalado en el artículo 22 del Reglamento de Medios de Impugnación, que establece que: “La personería se acredita mediante la exhibición del documento en original o copia certificada en el que conste tal carácter, el que deberá acompañarse a la promoción respectiva”. En consecuencia, el ciudadano que promueva un medio intra-partidista de defensa, al considerar violados sus derechos como militante del Partido Revolucionario Institucional, deberá acreditar fehacientemente tal carácter mediante la documental o el instrumento idóneo; esto es, la exhibición del instrumento en original o copia fotostática certificada en el que conste el carácter de militante priista con el que promueve, y, en el caso concreto que nos ocupa, los promoventes **NO PRESENTARON DOCUMENTAL ALGUNA CON LA QUE ACREDITARAN LA CALIDAD DE MILITANTE, ASPIRANTE O**

CANDIDATO MIEMBRO DE ALGUNA DE LAS PLANILLAS A PARTICIPAR EN LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS POLÍTICOS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO, O QUE DEMUESTRE QUE SON VECINOS DEL CITADO MUNICIPIO, por lo que no se puede deducir de manera alguna su eventual militancia que los legitime para acudir a esta instancia impugnativa, siendo que resulta evidente que si los promoventes no acreditan la calidad de militantes que les permita impugnar los acuerdos que emita la Dirigencia del Comité Directivo Estatal, **CARECEN DE INTERÉS LEGAL PARA PROMOVER EL PRESENTE MEDIO DE IMPUGNACIÓN** y consecuentemente actualizan la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia, por lo que, en términos de la anteriormente señalada fracción IV del artículo 49 del ordenamiento reglamentario antes invocado, procede el **DESECHAMIENTO DE PLANO**, sin entrar al estudio de fondo en el presente asunto. -----

En apoyo a lo anterior, se cita la siguiente Tesis Jurisprudencial:

PERSONERÍA. CUANDO EXISTE PLURALIDAD DE PROMOVENTES EN UN MISMO ESCRITO, ES SUFICIENTE QUE UNO SOLO LA ACREDITE PARA TENER POR SATISFECHO EL REQUISITO.- Cuando dos o más promoventes se ostenten como representantes legítimos de un mismo partido político en un solo escrito, **basta que uno de ellos acredite fehacientemente su personería, mediante el instrumento idóneo y en términos de la legislación aplicable, para que se considere debidamente satisfecho el requisito de procedencia relativo a la personería.**

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-032/97. Partido de la Revolución Democrática. 4 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis de la Peza.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-033/97. Partido de la Revolución Democrática. 4 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis de la Peza.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-034/97. Partido de la Revolución Democrática. 4 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis de la Peza.
La Sala Superior en sesión celebrada el veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y siete, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 1, Año 1997, páginas 28 y 29.

En el caso que nos atañe, es evidente que ni uno sólo de los promoventes acredita su personería, ni siquiera de manera presuntiva, por lo que esta autoridad partidaria no cuenta con elemento alguno para considerar satisfecho el requisito de procedibilidad correspondiente a la personería.

A mayor abundamiento, se cita la siguiente jurisprudencia aplicable:

PERSONERÍA. DEBE TENERSE POR ACREDITADA CUANDO LOS DOCUMENTOS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE LA ACREDITEN Y SE ESTÉ PROVEYENDO SOBRE EL ESCRITO DE DEMANDA.- **Si entre la presentación de la demanda y el auto que provea sobre su admisión, quien promueve a nombre del partido político, exhibe el documento con que acredita su personería, el órgano jurisdiccional de que se trate debe resolver respecto de tal presupuesto procesal, tomando en cuenta las constancias conducentes**

***hasta ese momento aportadas**, aún cuando no se hubiesen exhibido junto con el escrito de demanda, pues sólo de esta manera se cumple con el principio de prontitud y expeditéz en la impartición de justicia.*

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. [SUP-JRC-230/99](#). Partido de la Revolución Democrática. 30 de noviembre de 1999. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. [SUP-JRC-231/99](#).—Partido de la Revolución Democrática. 30 de noviembre de 1999. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. [SUP-JRC-232/99](#). Partido de la Revolución Democrática. 30 de noviembre de 1999. Unanimidad de votos.

La Sala Superior en sesión celebrada el doce de septiembre de dos mil, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 26 y 27.

SÉPTIMO.- Adicionalmente de la falta de la acreditación de la personería, en el presente caso se actualiza objetivamente el Desechamiento de Plano, sin entrar al estudio de fondo de los argumentos que se contienen en el escrito inicial, por ser evidente que **DE LOS HECHOS QUE SE CONSIGNAN EN EL ESCRITO QUE SE PROVEE NO PUEDE DEDUCIRSE AGRAVIO ALGUNO**, lo que resulta claro de la simple lectura del escrito de cuenta, mismo que sólo se concreta a exponer hechos hipotéticos y comentarios de desprestigio, sin presentar pruebas documentales que acrediten su dicho, ni formulan un razonamiento lógico jurídico que lo sustente, además de no vincular de manera alguna la supuesta ilegalidad con sus derechos partidarios, sin referirse específicamente a las supuestas anomalías derivadas de la publicación y contenido de la Convocatoria misma a la que aducen irregularidades que se identifiquen con los actos que manifiesta impugnar, además de que la promoción de mérito es omisa en señalar los artículos que estima violados en su perjuicio, así como en señalar las pruebas o elementos que pudieran generar convicción a este Órgano Jurisdiccional, por lo que no acreditan interés jurídico ni afectación a sus derechos partidarios, siendo procedente el desecharlo mencionado. - - - - -

Los recurrentes manifiestan inconformidad en contra del proceso interno, sin referirse a qué tipo de anomalías consideran, ni presentan pruebas al respecto y no obstante, en su relación de hechos no establecen de forma alguna actos o situaciones que se relacionen con una afectación a sus derechos partidarios, siendo notoriamente oscuros e irregulares en la relatoría de su propio escrito, pudiendo encuadrar en una cuestión de frivolidad. Lo anterior por ser evidente que los promoventes no presentan agravios formalmente y, aún y cuando se quisieran deducir estos de los hechos narrados en su escrito, esto no ocurre, toda vez que los mismos únicamente se refieren a supuestos no fundados ni acreditados que, en suma, **no refieren afectación a su derecho partidario** relacionado con el acto materia de la impugnación, sobre todo por el hecho contundente de que no obran elementos de prueba idóneos que demuestren su dicho como para considerar que cuentan con el carácter para acreditar su interés jurídico, por lo que deviene claramente infundada y consecuentemente improcedente su pretensión impugnatoria, lo que se

encuentra apoyado con las tesis jurisprudenciales emitidas por la Corte que a continuación se invocan: - - - - -

INTERÉS JURÍDICO Y LEGITIMACIÓN EN EL AMPARO. SU DISTINCIÓN. En términos del artículo 4º. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponde su causa criminal o por medio de un pariente o persona extraña en acto que corresponda a un causa criminal o por medio de un pariente o persona extraña en los casos en que la propia ley lo permita expresamente, y solo puede seguirse por el agraviado, su representante legal o su defensor. Esta previsión normativa, contenida en el capítulo II del título primero del libro primero de la propia ley denominado "De la capacidad y personalidad" atiende a un tema de legitimación en el proceso, precisando con detalle quién puede válidamente suscribir la demanda de garantías y quien, a u vez, puede proseguir el juicio relativo. **Así esta condición guarda estrecha vinculación con la fracción V del artículo 73 de la mencionada legislación, inserta en el capítulo de improcedencia del juicio (con la cual incluso se le confunde frecuentemente), que exige la existencia e un interés jurídico del quejoso como objeto directo de protección constitucional, esto es, se trata del derecho subjetivo que asiste a un gobernado que resulta afectado con el acto del derecho subjetivo que asiste a un gobernado que resulta afectado con el acto reclamado; en otras palabras, el interés jurídico constituye la prerrogativa legal que el orden normativo confiere a sus destinatarios y que se traduce en un deber de respeto a cargo da la autoridad, la cual sólo puede afectarlo cumpliendo las condiciones que la Constitución Federal establece para tales efectos, de tal forma que ese poder de exigencia otorgado a los afectados se hace efectivo a través del juicio de amparo, instituido precisamente para salvaguardar las garantías individuales, pero siempre condicionado a que sea el orden normativo al que conceda dicha prerrogativa a su titular, porque de no existir ese respaldo legal, se carece entonces de interés jurídico y, por tanto, de derecho alguno que preservar con el fallo constitucional.** Por tanto, aunque es la Ley Amparo están estrecha y necesariamente vinculadas entre si dichas figuras (legitimación e interés jurídico), gozan de individualidad y, por lo mismo, son perfectamente distinguibles una de otra, concretándose en la realidad jurídica en dos únicos supuestos posibles: el primero, que s urge cuando la legitimación y el interés jurídico concurren en un mismo individuo, lo cual produce que el agraviado, titular de garantías, acuda al juicio suscribiendo el escrito de demanda por su propio derecho; el segundo se materializa en los restantes casos descritos en el indicado artículo 4º., esto es, uno es l sujeto que suscribe la demanda por ser quien tiene la legitimación de hacerlo. (apoderado, representante, defensor) y otro, **es el titular del interés jurídico afectado** con el acto de autoridad (persona moral, procesado, menor de edad, etc).

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 202/2009. Concepción Elizabeth Cárdenas Hernández. 13 de Agosto2009. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Elizabeth Arrañaga Pichardo.

INTERÉS JURÍDICO. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL NO SUBSANABLE QUE DEBE SER ESTUDIADO DE OFICIO EN LA SENTENCIA, PREVIO AL ANÁLISIS DEL FONDO DEL ASUNTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Del análisis de los artículos 98,

99, 103, 203 y 353 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla se observa que **el interés jurídico esta previsto por la Ley como un presupuesto procesal que debe ser estudiado de oficio en la sentencia**, previo al análisis del fondo del asunto con base en las acciones y excepciones hechas valer que, además no es subsanable: de ahí que la circunstancia de que el juez natural hubiera admitido la demanda propuesta por el actor, no implica, en absoluto, que se tenga por reconocido para los efectos legales del juicio, el interés jurídico y legitimación del interesado, por el simple motivo de haber intentado la acción pues, como quiera que sea, **ello no releva a la autoridad judicial para analizar su cumplimiento al dictar la sentencia**, previo al estudio de la cuestión de fondo de la litis, y, para el caso **de no cumplirse dicho requisito, declarar la improcedencia de la acción con fundamento en el artículo 355 de ese Ordenamiento Procesal Civil cuando se hace valer como excepción la falta de legitimación.**

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 107/2009 René García Camacho. 28 de Marzo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.

Amén de lo anterior, cabe hacer mención que esta autoridad partidaria, al realizar la lectura y análisis del escrito que se provee, se encuentra que no se adminiculan los hechos de manera congruente y clara y no se acredita afectación al interés jurídico, ni afectación a los derechos partidarios del militante, por ende es menester señalar que el escrito presentado por el promovente encuadra en el supuesto de *frivolidad*. - - - - -

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 33/2002 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: - - - - -

FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE.- En los casos que requieren del estudio detenido del fondo para advertir su frivolidad, o cuando ésta sea parcial respecto del mérito, el promovente puede ser sancionado, en términos del artículo 189, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El calificativo frívolo, aplicado a los medios de impugnación electorales, se entiende referido a las demandas o promociones en las cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan. Cuando dicha situación se presenta respecto de todo el contenido de una demanda y la frivolidad resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales suelen determinar que se decrete el desechamiento de plano correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de incertidumbre; sin embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo se pueda advertir con su estudio detenido o es de manera parcial, el desechamiento no puede darse, lo que obliga al tribunal a entrar al fondo de la cuestión planteada. Un claro ejemplo de este último caso es cuando, no obstante que el impugnante tuvo a su alcance los elementos de convicción necesarios para poder corroborar si efectivamente existieron irregularidades en un acto determinado, se limita a afirmar su existencia, y al momento de que el órgano jurisdiccional lleva a cabo el análisis de éstas, advierte que del material probatorio clara e indudablemente se corrobora lo contrario, mediante pruebas de carácter objetivo, que no requieren de interpretación alguna o de cierto tipo de apreciación de carácter subjetivo, lo que sucede en los casos en que el actor se limita

a afirmar que en la totalidad de las casillas instaladas en un municipio o distrito, la votación fue recibida por personas no autorizadas, y del estudio se advierte que en la generalidad de las casillas impugnadas no resulta cierto. El acceso efectivo a la justicia, como garantía individual de todo gobernado y protegida tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en las leyes secundarias, no puede presentar abusos por parte del propio gobernado, pues se rompería el sistema de derecho que impera en un estado democrático. La garantía de acceso efectivo a la justicia es correlativa a la existencia de órganos jurisdiccionales o administrativos que imparten justicia, por lo que a esas instancias sólo deben llegar los litigios en los que realmente se requiera la presencia del juzgador para dirimir el conflicto. Por tanto, no cualquier desavenencia, inconformidad o modo particular de apreciar la realidad puede llevarse a los tribunales, sino que sólo deben ventilarse ante el juzgador los supuestos o pretensiones que verdaderamente necesiten del amparo de la justicia. Por tanto, si existen aparentes litigios, supuestas controversias, o modos erróneos de apreciar las cosas, pero al verificar los elementos objetivos que se tienen al alcance se advierte la realidad de las cosas, evidentemente tales hipótesis no deben, bajo ninguna circunstancia, entorpecer el correcto actuar de los tribunales; sobre todo si se tiene en cuenta que los órganos electorales deben resolver con celeridad y antes de ciertas fechas. En tal virtud, una actitud frívola afecta el estado de derecho y resulta grave para los intereses de otros institutos políticos y la ciudadanía, por la incertidumbre que genera la promoción del medio de impugnación, así como de aquellos que sí acuden con seriedad a esta instancia, pues los casos poco serios restan tiempo y esfuerzo a quienes intervienen en ellos, y pueden distraer la atención respectiva de los asuntos que realmente son de trascendencia para los intereses del país o de una entidad federativa, e inclusive el propio tribunal se ve afectado con el uso y desgaste de elementos humanos y materiales en cuestiones que son evidentemente frívolas. Tales conductas deben reprimirse, por lo que el promovente de este tipo de escritos, puede ser sancionado, en términos de la disposición legal citada, tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso.

Tercera Época

Juicio de revisión constitucional electoral. [SUP-JRC-033/2002](#). Partido de la Revolución Democrática. 13 de febrero de 2002. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. [SUP-JRC-050/2002](#). Partido de la Revolución Democrática. 13 de febrero de 2002. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. [SUP-JRC-051/2002](#). Partido de la Revolución Democrática. 13 de febrero de 2002. Unanimidad de votos.

La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 34 a 36.

OCTAVO.- Por otra parte, del escrito que se provee se desprende que los promoventes se pronuncian en contra de los tiempos establecidos en la Convocatoria de mérito, al desarrollarse el proceso interno en una temporada considerada como vacacional, lo que en materia electoral o democracia interna del Partido, es irrelevante, toda vez que el Reglamento de Medios de Impugnación puntualiza en su artículo 15 que “Durante los procesos internos de elección de dirigentes y postulación de candidatos todos los días y horas son hábiles. Los términos se computarán de momento a momento y si están señalados por días, éstos se considerarán de

veinticuatro horas”, lo que en el presente caso es aplicable, al haber sido aprobadas las fechas señaladas en la Convocatoria, las cuales se encuentran previstas para el desarrollo de todas y cada una de las etapas procesales del presente proceso interno. - - - - -

Por su parte, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señala en su artículo 357 que durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles, situación que de manera análoga afecta a los procesos internos de los Partidos Políticos para la renovación de sus estructuras partidistas y, por otra parte, en el mismo precepto señala que para el caso de aquellas quejas que se presenten antes del proceso electoral, los plazos se computarán por días hábiles: -

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Artículo 357.

...

11. Los plazos se contarán de momento a momento y si están señalados por días, estos se considerarán de veinticuatro horas. **Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles.** En el caso de las quejas que se inicien antes del proceso electoral, los plazos se computarán por días hábiles, respecto de las que se presenten una vez iniciado aquél, por días naturales.

...

El argumento vertido por los promoventes no es aplicable al presente caso, toda vez que el Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidatos en su artículo 7º menciona que el proceso de elección de Dirigentes inicia con la publicación de la Convocatoria y concluye con la Declaración de Validez del Proceso y la entrega de la Constancia de Mayoría, y toda vez que los promoventes interpusieron su escrito de impugnación no sólo de manera extemporánea, sino en contra de un acto que da inicio al proceso interno mismo, es de entenderse que éste no es ajeno ni se encuentra fuera de dicho proceso de elección de dirigentes. - - - - -

Artículo 7º.

El proceso de elección de dirigentes inicia al expedirse la Convocatoria respectiva y concluye con la declaración de validez del proceso y la entrega de la Constancia de Mayoría a los dirigentes electos.

A todo lo anterior, sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia que a la letra menciona: - - - - -

PLAZO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. DEBEN CONSIDERARSE TODOS LOS DÍAS COMO HÁBILES, CUANDO ASÍ SE PREVEA PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE ELECCIÓN PARTIDARIA (NORMATIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA).- De la interpretación sistemática de los artículos 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 41, 42 y 118 del Reglamento General de Elecciones y Consultas del Partido de la Revolución Democrática, se advierte que **cuando la normativa estatutaria de un partido político establece que durante el desarrollo de un procedimiento electoral, todos los días y horas son hábiles para la promoción de los medios de defensa partidistas; debe estimarse que esa regla es aplicable cuando se controviertan, ante el órgano jurisdiccional, actos derivados de esos procedimientos electivos, a fin de hacer**

coherente el sistema de medios de impugnación partidista y constitucional, al tratarse de actos concatenados, cuya resolución definitiva, en su caso, la emiten los tribunales competentes.

Quinta Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. [SUP-JDC-213/2012](#).—Actor: José Luis Hoyos Oliva.—Responsable: Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática.—17 de febrero de 2012.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Rodrigo Quezada Goncen.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. [SUP-JDC-250/2012](#).—Actora: Tamara Pamela Said Serna.—Responsable: Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática.—22 de febrero de 2012.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretaria: Marcela Elena Domínguez.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. [SUP-JDC-251/2012](#).—Actora: Fabiola Gallegos Araujo.—Responsable: Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática.—22 de febrero de 2012.—Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Rodrigo Quezada Goncen.

De igual manera la siguiente jurisprudencia se pronuncia al respecto: - - - - -

PLAZO. PARA LA INTERPOSICIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL EN CONTRA DE ACTOS EMITIDOS EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA ELEGIR AUTORIDADES MUNICIPALES A TRAVÉS DEL VOTO POPULAR, DEBEN COMPUTARSE TODOS LOS DÍAS Y HORAS COMO HÁBILES, POR TRATARSE DE PROCESOS ELECTORALES.- De lo dispuesto en los artículos 39; 41, párrafos primero y segundo, Base V; 99 y 116, párrafos primero y segundo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 2, párrafo 1; 3, párrafo 1, incisos a) y b) y párrafo 2, inciso d); 6, párrafo 1 así como 7, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se obtiene que **con el objeto de garantizar el cabal cumplimiento a los principios de certeza y definitividad en materia electoral, el legislador estableció que en el plazo previsto para la impugnación de actos y resoluciones vinculados con el desarrollo de un proceso electoral, todos los días y horas se consideran hábiles;** de ahí que si la renovación periódica de autoridades municipales se da a través de un proceso electoral, en virtud de que se lleva a cabo por medio del ejercicio del voto ciudadano, deben contabilizarse todos los días y horas, para la promoción de los medios de impugnación, máxime cuando entre la jornada electoral y la toma de protesta del cargo, debe agotarse, en su integridad, la cadena impugnativa. De esta forma, los asuntos sometidos al escrutinio jurisdiccional se resolverán dentro de las correspondientes etapas de esos procesos comiciales, previo a que queden clausurados. Con lo que se dota de plena efectividad a los principios rectores de la materia, de definitividad y certeza.

Quinta Época:

Contradicción de criterios. [SUP-CDC-2/2013](#).—Entre los sustentados por la Sala Superior y la Sala Regional correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.—24 de julio de 2013.—Unanimidad de cuatro votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Héctor Daniel García

Figueroa.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticuatro de julio de dos mil trece, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

En mérito de lo expuesto, esta Comisión Estatal de Justicia Partidaria, con fundamento en los Artículos 209, 210, 211, 214 fracciones I, III, X y XII, y 215 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional; 1, 2, 3 fracción III, 4 fracción II, 28 y 31 fracciones IV y VIII del Reglamento Interior de las Comisiones Nacional, Estatales y del Distrito Federal de Justicia Partidaria; 1, 2, 3, 5, 6, 8 al 17, 18 fracciones I, IV, V, VI, VIII, IX y X, 19 al 22, 23 fracciones I, II y III, 34, 35, 43 al 49 del Reglamento de Medios de Impugnación, dicta los siguientes: - - - - -

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se decreta la improcedencia y en consecuencia se **DESECHA DE PLANO** el medio de impugnación que pretenden hacer valer los **CC. PAOLA BARRERA MAZÓN y OTROS**, quienes dicen ser vecinos del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, por haberse presentado fuera de los plazos señalados en el Reglamento de Medios de Impugnación del Partido Revolucionario Institucional; además de no acreditarse la legitimación de quienes promueven; no señalar domicilio para oír y recibir notificaciones; no identificar el acto o resolución, ni a la autoridad responsable del acto que se impugna; no mencionar los artículos que estiman violados en su perjuicio; no señalar ni aportar pruebas que estén relacionadas con los hechos que reclaman; ni demostrarse hechos o actos constitutivos de violaciones realizadas por los órganos de este Instituto Político en agravio de los promoventes, en los términos debidamente motivados y fundamentados en los Considerandos de esta resolución, por lo que consecuentemente, en términos del artículo 23 de dicho ordenamiento, se actualizan las causales de improcedencia previstas en las fracciones I, II, III y IV de dicho precepto, al pretender impugnar un acto o resolución que no afecta el interés jurídico de los promoventes; haber presentado su escrito fuera de los plazos señalados por la normatividad intrapartidaria; así como carecer de personería y legitimación para impugnar el acto o resolución controvertido. - - -

SEGUNDO.- Se acuerda el desechamiento del presente asunto por actualizarse objetivamente la hipótesis jurídica prevista por la fracción IV del artículo 49 del Reglamento de Medios de Impugnación, al advertirse que el escrito de impugnación presentado por los promoventes incumplió diversos requisitos de procedibilidad, conforme los argumentos que se señalan en los Considerandos de la presente Resolución, ordenándose se archive el presente expediente como asunto totalmente concluido. - - - - -

TERCERO.- Notifíquese a los promoventes en términos del párrafo segundo del artículo 34 del Reglamento de Medios de Impugnación, mediante cédula que se fije en los Estrados de este órgano de Justicia Partidaria, en virtud de que no señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, surtiendo sus efectos el día y hora de su fijación. - - - - -

Así lo resolvió en pleno la Comisión Estatal de Justicia Partidaria, y por mandato de lo dispuesto por el artículo 16 fracción IV del Reglamento Interior de las Comisiones Nacional, Estatales y del Distrito Federal de Justicia Partidaria, se autoriza al Presidente LICENCIADO JORGE TORRES RODRÍGUEZ a su firma para la debida publicación y notificación de la presente, asistido por el Secretario General de Acuerdos LICENCIADO LUIS REYNA GUTIERREZ. -----

“DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL”

POR LA COMISIÓN

PRESIDENTE

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

LIC. JORGE TORRES RODRÍGUEZ

LIC. LUÍS REYNA GUTIÉRREZ